



146ª Asamblea de la UIP
Manama (11–15 de marzo de 2023)



Comisión Permanente
de Paz y Seguridad Internacional

C-I/146/DR
17 de enero de 2023

Los ciberataques y los ciberdelitos: los nuevos riesgos para la seguridad mundial

***Proyecto de resolución presentado por los co-Relatores
Sr. J. Cepeda (España) y Sra. S. Falaknaz (Emiratos Árabes Unidos)***

La 146ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,

- 1) *Condenando* todas las formas de ciberdelitos y ciberataques, y *reafirmando* la necesidad de combatir estos actos a través de la cooperación internacional y la elaboración de marcos jurídicos apropiados,
- 2) *Considerando* que debemos generar confianza entre los países frente a los ciberdelincuentes, que no conocen fronteras ni límites,
- 3) *Observando* la creciente dependencia del ciberespacio de personas, instituciones y Estados,
- 4) *Consciente* del aumento de la ciberdelincuencia y los ciberataques vinculados a la aceleración de la transformación digital, en particular la impuesta por la pandemia de COVID-19,
- 5) *Tomando nota* de la responsabilidad de los parlamentos de proteger a los ciudadanos en el ciberespacio utilizando nuevas infraestructuras y recursos, de la misma manera que en el mundo físico,
- 6) *Recordando* las siguientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 31/72 de 10 de diciembre de 1976 titulada *Convención sobre la prohibición del uso de técnicas de modificación ambiental con fines militares o cualquier otro propósito hostil*, 55/63 de 4 de diciembre de 2000 y 56/121 de 19 de diciembre de 2001 titulada *Combatir la explotación de la tecnología de la información con fines delictivos*, 57/239 de 31 de enero de 2003 titulada *Creación de una cultura mundial de la ciberseguridad*, y 69/28 de 2 de diciembre de 2014 titulada *Avances en la tecnología de la información en el contexto de la seguridad internacional*,
- 7) *Subrayando* la importancia de los convenios regionales sobre ciberdelincuencia, delincuencia organizada transnacional, intercambio de información y asistencia administrativa, en particular, el *Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia*, de 23 de noviembre de 2001 y su *Protocolo adicional relativo a la tipificación como delito de los actos de carácter racista y xenófobo cometidos a través de sistemas informáticos*, de 28 de enero de 2003, el *Acuerdo de Cooperación para Garantizar la Seguridad Internacional de la Información entre los Estados Miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai*, de 16 de junio de 2009; y la *Convención Árabe sobre la lucha contra los delitos relacionados con las tecnologías de la información*, de 21 de diciembre de 2010,

- 8) *Recordando* el trabajo de la UIP sobre los diversos nuevos riesgos a los que están expuestas nuestras sociedades cada vez más digitalizadas, en particular las resoluciones de la UIP tituladas *La ciberguerra: una grave amenaza para la paz y la seguridad mundiales* (adoptada el 1º de abril de 2015 en la 132ª Asamblea, en Hanói) y *La legislación en todo el mundo para combatir la explotación y el abuso sexuales de niños en línea* (adoptada el 30 de noviembre de 2021 en la 143ª Asamblea, en Madrid), que también recuerda el Convenio del Consejo de Europa titulado *La protección de los niños contra la explotación y abuso sexuales* (Convenio de Lanzarote) de 25 de octubre de 2007,
- 9) *Preocupada* por la falta de instrumentos jurídicos universales destinados a reprimir la ciberdelincuencia y los ciberataques,
- 10) *Acogiendo con beneplácito* los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para adoptar, a través de la resolución 74/247 de la Asamblea General, de 27 de diciembre de 2019, una convención internacional integral para combatir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, y acogiendo con beneplácito la creación de un comité especial para redactar esta convención,
- 11) *Acogiendo con beneplácito* el hecho de que la UIP esté participando en el proceso de consulta de múltiples partes interesadas de este comité especial para hacer que la voz de los parlamentos sea escuchada,
- 12) *Tomando nota* de la necesidad de aplicar un enfoque integral y global al problema de la ciberdelincuencia y los ciberataques, en particular mediante el desarrollo de un marco jurídico internacional para combatir la ciberdelincuencia y los ciberataques y sus graves consecuencias para los ciudadanos, y para proteger la paz, la seguridad mundiales y la estabilidad económica,
- 13) *Reconociendo* que los legisladores y los gobiernos deben tomar urgentemente medidas más fuertes a nivel nacional para combatir el cibercrimen y los ciberataques, dada su multiplicación y rápida evolución,
- 14) *Reconociendo también* que es necesaria una acción parlamentaria conjunta de alcance internacional para ofrecer un escudo protector a los ciudadanos, gobiernos y países, quienes son todos partes interesadas en esta tarea,
- 15) *Reconociendo* que las mujeres, los jóvenes y los niños son los más vulnerables y las primeras víctimas de los ataques en Internet, y son afectados personal, social, cultural y económicamente por las acciones de los ciberdelincuentes,
- 16) *Notando* la naturaleza de las amenazas y los riesgos de la ciberdelincuencia transnacional y los ciberataques para la paz y la seguridad internacionales, así como el rápido desarrollo del ciberespacio, por lo que los métodos utilizados por los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados,
- 17) *Notando también* que los delitos y los ataques cibernéticos abarcan no solo los ataques a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las violaciones de la privacidad y la creación y despliegue de software malicioso, sino también los ataques a la infraestructura nacional estratégica, así como otros actos que pueden ocurrir fuera de línea y ser facilitados por las TIC, incluido el fraude en línea, la compra de drogas, el lavado de dinero, los delitos de odio, la propaganda, el adoctrinamiento extremista y la explotación sexual de mujeres y niños a través de Internet, todo lo cual tiene un impacto negativo en la seguridad global y la estabilidad económica,
- 18) *Considerando* que la mayoría de las leyes nacionales fueron adoptadas mucho antes de que aparecieran los ciberdelitos y los ciberataques y, por lo tanto, no siempre permiten responder con eficacia a estas amenazas,
1. *Pide* a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, que adopte una definición global común de ciberdelincuencia y ciberataques, que abarque todas las variantes de estas actividades y las acciones que pueden provocar;

2. *Alienta* a los parlamentos a pedir al ejecutivo que apoye los esfuerzos de las Naciones Unidas para adoptar una nueva convención sobre ciberdelincuencia participando activamente en su redacción;
3. *Insta* a los parlamentos y los gobiernos a que insistan en la necesidad de incluir en la convención una definición integral de ciberdelincuencia y ciberataques, así como mecanismos para apoyar la cooperación internacional para combatir la ciberdelincuencia y los ciberataques;
4. *Invita* a los parlamentos y gobiernos a utilizar esta convención, una vez adoptada, como un medio para fortalecer la legislación nacional y aumentar la cooperación internacional para combatir la ciberdelincuencia y los ciberataques;
5. *Pide* a los parlamentos que promulguen nuevas leyes sobre ciberdelitos y ciberataques, dada la escala y frecuencia cada vez mayores de tales actividades y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacionales y la estabilidad económica mundial;
6. *Alienta* a los parlamentos a hacer pleno uso de su función de supervisión para garantizar que los gobiernos cuenten con las herramientas necesarias para combatir el rápido aumento de la ciberdelincuencia y los ciberataques y para proteger la seguridad digital, la identidad, la privacidad y los datos de los ciudadanos, especialmente de las personas más vulnerables;
7. *Recomienda firmemente* a los parlamentos establecer marcos legislativos para proteger la infraestructura de Internet, en particular los cables submarinos, las redes satelitales y los servicios esenciales de Internet, así como los grandes centros de datos públicos y privados que brindan servicios en la nube, los que a su vez deberían intercambiar información sobre los ciberincidentes, en tiempo real, a través de los organismos nacionales y supranacionales pertinentes;
8. *Alienta* a los parlamentos a promover un ciberespacio seguro instando al ejecutivo a cooperar para erradicar el ciberdelito y evitar que los ciberdelincuentes actúen, respondiendo a las solicitudes de asistencia, cuando sea posible en tiempo real, asegurando la cadena de suministro de las empresas en su país, a informar de posibles vulnerabilidades a terceras partes para ayudarlos a prevenir futuros incidentes y, en particular, a apoyar y proteger a todos los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos dentro y fuera de las fronteras de su país;
9. *Alienta también* a los parlamentos a elaborar leyes que promuevan servicios transversales de ciberseguridad centrados en la prevención (concientización, auditoría y capacitación) y detección de incidentes (24 horas al día, 7 días a la semana) y que permitan una respuesta inmediata y efectiva a las amenazas cibernéticas;
10. *Recomienda* que los parlamentos establezcan instituciones y órganos apropiados, por ejemplo, centros nacionales de ciberseguridad, equipos de respuesta rápida en el área informática, equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática y centros de operaciones de seguridad, cuando aún no existan en su país;
11. *Recomienda también* que todos los parlamentos se aseguren de que estas instituciones y órganos cuenten con suficientes recursos presupuestarios y personal especializado para poder responder con flexibilidad y eficacia a los ciberataques y para proteger las infraestructuras estratégicas, las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos;
12. *Insta* a los parlamentos a que promuevan la coordinación internacional entre estas instituciones y organismos y la creación de un centro de operaciones de seguridad global bajo la égida de las Naciones Unidas para monitorear, prevenir y detectar amenazas cibernéticas de manera continua, para investigarlas y combatirlas;

13. *Recomienda* que esta entidad ayude a todos los países, en particular a aquellos con menos recursos, a desarrollar sus capacidades de acción y reacción, a poner en común su información, sus conocimientos y los resultados de sus investigaciones, para anticiparse a futuros desafíos tecnológicos como la computación cuántica, 5G, metaverso e inteligencia artificial, y dar la voz de alarma en caso de violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cualquier circunstancia;
14. *Pide* a los parlamentos que fomenten la inversión en investigación y desarrollo, incluyendo disposiciones específicas sobre ciberseguridad en proyectos de ley y propuestas legislativas, y proporcionando suficientes créditos presupuestarios, para anticipar posibles ciberamenazas emergentes y protegerse de ellas;
15. *Alienta* a los parlamentos a construir alianzas con empresas, instituciones académicas y todas las demás partes interesadas, incluida la sociedad civil, para desarrollar un ecosistema de ciberseguridad fuerte y colaborativo;
16. *Alienta también* a los parlamentos a crear espacios legislativos que permitan a los parlamentos, los gobiernos, las empresas, el mundo académico y la sociedad civil cooperar en tiempo real para defender el interés general de todos los Estados;
17. *Pide* a los parlamentos y parlamentarios que trabajen activamente para desarrollar, a nivel nacional, una comprensión común y actualizada de la naturaleza de la ciberdelincuencia y los ciberataques tal como los experimentan los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones;
18. *Insta* a los parlamentos a contribuir al desarrollo de una verdadera "cultura de ciberseguridad" mediante el desarrollo de programas educativos destinados a capacitar a las generaciones futuras, desde la infancia, en el uso de las herramientas tecnológicas, tanto en términos de las amplias oportunidades que ofrecen como de los importantes riesgos asociados a ellas;
19. *Recomienda* que los parlamentos refuercen la protección de las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables en el ciberespacio, asegurando el respeto de los derechos humanos e incluyendo en las políticas educativas relacionadas con el uso de las redes sociales mecanismos para prevenir la violencia de género;
20. *Insta* a los parlamentos a que tomen las medidas necesarias para proteger los momentos cruciales de la democracia, en particular los períodos en que los ciudadanos ejercen su derecho al voto, a fin de evitar ataques e injerencias encaminadas a influir, modificar o violar la libre formación de la opinión de los ciudadanos durante los procesos electorales;
21. *Pide* a la comunidad internacional que tome medidas para proteger la democracia garantizando que todos los parlamentos del mundo, como instituciones que representan la voluntad del pueblo, gocen de una protección especial a través de su inclusión en las listas de infraestructura nacional crítica y servicios esenciales;
22. *Pide* a los parlamentos que examinen más de cerca la naturaleza compleja y cambiante de la ciberdelincuencia y los ciberataques mediante la organización de seminarios, talleres y conferencias especializados sobre este tema;
23. *Invita* a la Secretaría de la UIP, junto con las organizaciones interesadas, a promover esta nueva visión de la ciberseguridad apoyando a los parlamentos en sus esfuerzos de creación de capacidad;
24. *Recomienda* que la UIP, como organización mundial de los parlamentos, pueda desempeñar un papel de liderazgo en la gobernanza internacional de Internet y la resiliencia cibernética, participando en todos los foros internacionales pertinentes,

incluidos los organizados por las Naciones Unidas, para hacer oír la voz de los parlamentos, a fin de prever toda amenaza cibernética a la seguridad, los medios de subsistencia o la forma de vida de los ciudadanos, y poder prepararse, resistir, responder y superarlas.